

SESIÓN N° 04-00

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL,
a las ocho horas, quince minutos del dos de marzo de dos mil.

**VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO "NON BIS IN IDEM" ENTRE LA COMPETENCIA DE TRÁNSITO
Y LA COMPETENCIA PENAL. POSIBILIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE SOLICITAR
LA REMISIÓN DE EXPEDIENTES A LOS JUZGADOS DE TRÁNSITO**

"ARTÍCULO V

El Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en la Sesión N° 13-99, artículo IV, conoció el oficio UJ-285-99 del 9 de agosto de 1999, suscrito por la Licda. **Carmen Cerdas Cisneros**, referente a la consulta realizada por la Licda. Damaris Acuña Fernández, Jueza de Tránsito y se acordó previo a resolver lo correspondiente, solicitarle a la Licda. Cerdas reconsidere el criterio expresado.

-0-

La Licda. **Gloriana López Fuscaldo**, Abogada Asistente de la Escuela Judicial, en oficio UJ-009-2000 del 12 de enero de 2000 dice:

"En cumplimiento del acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en la sesión N° 13-99, celebrada el 2 de diciembre de 1999, le remito lo solicitado en dicho acuerdo.

En primer término y de previo a la reconsideración del criterio expresado en el oficio UJ-285-99 del 9 de agosto de 1999, procede informar que en la Comisión de Asuntos Penales no consta recomendación alguna en ese sentido. Sin embargo, sí consta una consulta aún no evacuada por la Comisión, que contiene un planteamiento similar a la presentada ante la Escuela Judicial.

De seguido, se transcribe la consulta planteada por la licenciada Damaris Acuña Fernández, Jueza de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, ante la Escuela Judicial, que dice literalmente:

Como Juez de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica he presentado el conflicto de competencia en el expediente 98-201635-485-TP para ante el Tribunal de Juicio de este mismo circuito. La disconformidad que he planteado en el conflicto de competencia radica en los siguientes razonamientos:

1. La Fiscalía solicita al Juez Penal testimonio de piezas y separa la causa en dos. En este caso concreto se señaló que los hechos correspondían a una colisión entre los vehículos placa CL-133683 y CL-69706, conducidos por Erick Rodríguez Madrigal y Marvin Castillo Vega. Que a consecuencia de la colisión ambos imputados así como Wálter Sancho Fuentes que viajaba en el vehículo conducido por Marvin resultaron con lesiones. Los conductores con lesiones leves y Marvin con una incapacidad de quince días y se solicitó revaloración. El razonamiento del conflicto de competencia radica en el hecho de que el ordenar testimonio de piezas lesiona el principio de *non bis in idem* —garantizado en el artículo 11 del Código Procesal Penal— tal garantía he señalado que procede por razones de seguridad jurídica cuando existe cosa juzgada o litispendencia y cuando exista identidad objetiva (identidad del hecho) e identidad subjetiva (identidad del imputado) y que por ello he afirmado que no es procedente separar las causas en virtud de que el proceso de tránsito implica también la persecución penal, lo que significa que a un mismo imputado se le sigan dos causas por el mismo hecho. Contrario a ello el juez Nelson Rodríguez Jiménez, ha señalado que "El asunto de tránsito es una infracción que fundamentalmente persigue la reparación del

daño, por lo que las pretensiones en una y otra vías son distintas. En materia de delitos cuando no se ejercite la acción civil resarcitoria o la querrela, lógicamente la pretensión es la sanción penal y en tránsito la pretensión civil, la condena en daños y perjuicios. Ello nos lleva a concluir, visto desde la nueva normativa procesal penal, que lo que se resuelva en una u otra vía no es vinculante. La sentencia penal no podría obligar al juez de tránsito a revisar su fallo en caso de ser contradictoria, ni mucho menos vincular al juez penal el fallo de tránsito, puesto que como se indicó las pretensiones son distintas. Por tal motivo, no se violenta el principio "non bis in idem...". Aún y cuando respeto el criterio del señor juez, es lo cierto que considero que no podría afirmarse que las persecuciones son distintas, puesto que en materia de tránsito también se impone una pena de multa. Nada impide conforme al artículo 46 del Código Procesal Penal el juez penal puede conocer de los hechos punibles más leves. "Los Tribunales con competencia para conocer de delitos la tendrán también para conocer de contravenciones...". Ahora bien, no sólo piénsese en esto. Con los mismos hechos arriba descritos. Qué pasaría me pregunto cuando éste Despacho se haya condenado a alguno de los imputados (Érick) por la colisión o infracción a la ley de tránsito como se le quiera llamar. Podría válidamente otro juez venir a conocer el asunto penal y condenar —porque podría ser el caso— a Marvin? o condenar nuevamente a Érick, por lesiones culposas o imponerle otra pena de multa?; y porque no. No sabemos si el ofendido va a presentar la acción civil resarcitoria, que en todo caso también tendría el resarcimiento en daños y perjuicios. Diferente sería, creo yo, el caso, si el ofendido expresamente indicara que no tiene interés en el asunto, y sólo bajo ese supuesto sí se podría conocer en este Despacho únicamente lo que corresponde a la colisión. Ante las apreciaciones señaladas ¿Se viola el principio de non bis in idem?

2. Otra consulta que requiero hacer está también con otro hecho algo similar. Resulta que en algunas oportunidades sin mediar dictamen medicolegal o existiendo éste en el que se solicita la remisión del expediente a éste despacho, en el primer caso sin remitir a la víctima a la Medicatura Forense y en el segundo

sin la revaloración, alegando entre otros que la tramitación de tránsito es más expedita y que a su juicio no se trata de unas lesiones que sobrepasen la incapacidad de los diez días. En varias oportunidades después de continuar este Despacho con el trámite y después de remitir a la víctima a valorar, se ha determinado que tal apreciación del fiscal no era correcta. Por ello considero que hasta tanto un despacho judicial no tenga una certeza absoluta de que es incompetente para conocer de un asunto determinado, no puede válidamente hacer tal declaratoria. En algunas oportunidades también han señalado que se remite el expediente a este despacho porque no fue posible localizar a la víctima para ser valorada médicamente. Aún y cuando las lesiones culposas son de instancia privada, nada impide conforme al artículo 17 del Código Procesal Penal, que el Ministerio Público realice los actos urgentes o imprescindibles para conservar los elementos de prueba. Y un elemento de prueba lo constituye la pericia médica. Por lo tanto reitero y ésta es mi consulta ¿El Ministerio Público puede solicitar la remisión del expediente a los juzgados de tránsito, sin tener una certeza de que no es competente para conocer la causa?

CONSIDERANDO:

1. Que el primer punto consultado se refiere a un asunto específico y que además se encuentra aún activo. Sin embargo y en relación con la pregunta general planteada allí, procede realizar algunas observaciones en torno al principio de *non bis in idem*.
2. Que si una persona resulta absuelta ante un juzgado de tránsito y por los mismos hechos es juzgada en sede penal, se lesionaría el principio del *non bis in idem*. En ese sentido, si se constatan lesiones leves, graves o gravísimas, debe ventilarse el caso y resolverse en sede penal. De ser lesiones levísimas, los juzgados de tránsito pueden conocer, sin existir problema de competencia.
3. Que cierto tipo de lesiones son consideradas materia de delitos menores o contravenciones según el Código Penal. Estas infracciones pueden ser conocidas por los juzgados de

tránsito o bien, pueden ser ventiladas en sede penal, según el artículo 46 del Código Procesal Penal.

4. Que para verificar la calificación de determinada lesión, el Código Penal recurre a la cuantificación de los días de incapacidad, que se realiza por peritaje medicolegal. De no existir este peritaje, debe prescindirse de esta prueba y proceder con la investigación.
5. Que el segundo punto trata de una situación de carácter general.
6. Que la cuestión planteada en el segundo punto de la consulta, se trata de un asunto de evacuación de prueba, de competencia y de agotamiento de las instancias judiciales.
7. Que según establece el artículo 62 del Código Procesal Penal, corresponde al Ministerio Público, practicar "las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho punitivo". En ese sentido, el Ministerio Público deberá hacer lo pertinente para determinar si existió el hecho delictivo y establecer su competencia.
8. Que al Ministerio Público corresponde la función de investigar y de atender los hechos donde presumiblemente se ha cometido delito. El artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone entre otras, que "tiene la función de requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública". En virtud de ello, deberá decidir si procede tramitar un caso determinado o enviarlo a los tribunales de tránsito.
9. Que en relación con el examen por parte del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, el artículo 168 de la Ley de Tránsito establece que la persona que haya sufrido lesiones en un accidente debe someterse a esa prueba, pero si ésta se rehúsa, entonces la alcaldía prescindirá de esa prueba.
10. Que la norma aplicable en este asunto es clara en que en principio, la prueba debe evacuarse, sin embargo, ante la negativa de la persona,

debe prescindirse de ella y continuar con la investigación. Es en esta particular circunstancia, en donde el Ministerio Público deberá considerar las otras pruebas recabadas, para determinar si corresponde trasladar el caso determinado a los tribunales de tránsito.

11. Que en relación con la cuestión planteada en la consulta, el Juzgado de Tránsito es competente y debe pronunciarse sobre el asunto cuando éste le es enviado por el Ministerio Público y así agotar la instancia procesal correspondiente.
12. Que en vista de los plazos perentorios previstos en la sección II del Capítulo I de la Ley de Tránsito, el asunto debe tramitarse en el Juzgado de Tránsito, cumpliendo así con la vía procesal correspondiente.
13. Que en los casos donde se esté ante la presencia de un delito producto de un accidente, opera la excepción del artículo 147 de la Ley de Tránsito y procede el conocimiento de la causa por las autoridades penales correspondientes. En este caso, los Juzgados de Tránsito no son competentes.
14. Que de la interpretación de los artículos 147 y 168 de la Ley de Tránsito se entiende que es en los casos en que se cuente con prueba que sustente la presunta comisión de un tipo penal, que se aplica la excepción señalada.
15. Que sólo en el caso en que según los lineamientos del artículo 168 de la Ley de Tránsito, es decir, agotada la prueba del examen médico o habiendo prescindido de ella, existan elementos que presuman la comisión de un delito, los Juzgados de Tránsito no son competentes.
16. Que si la excepción de competencia de los Tribunales de Tránsito, contemplada en el artículo 147 de la Ley de Tránsito, opera "ante la presencia de un delito", a *contrario sensu*, al no tener certeza de dicha situación, no opera la excepción y los Tribunales de Tránsito siguen siendo competentes.

POR TANTO:

1. En relación con el primer punto planteado, la Escuela Judicial no puede evacuar la consulta

debido a que se refiere a un asunto específico y que además se encuentra aún activo. Sin embargo, y en relación con la cuestión general que plantea la pregunta, vale decir que si una persona resulta absuelta ante un juzgado de tránsito y por los mismos hechos es juzgada en sede penal, se lesionaría el principio del *non bis in ídem*.

2. En relación con el segundo planteamiento de la consulta, en virtud de los razonamientos antes expuestos y tomando en consideración el peligro de que las causas prescriban en la sede de tránsito, el Ministerio Público sí puede solicitar la remisión del expediente a los Juzgados de Tránsito, sin tener certeza de su incompetencia.

3. Salvo que se aplique la excepción de competencia de los Tribunales de Tránsito, contemplada en el artículo 147 de la Ley de Tránsito, que opera "ante la presencia de un delito", *a contrario sensu*, al no tener certeza de dicha situación, no opera la excepción y los Tribunales de Tránsito siguen siendo competentes."

Prevía deliberación, SE ACUERDA: Aprobar el informe presentado por la Licda. Gloriana López Fuscaldo, Abogada Asistente a.f. de la Escuela Judicial y hacerlo del conocimiento de la Licda. Damaris Acuña Fernández, Jueza de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica y del Consejo Superior para lo que corresponda."

★ ★ ★